

La irrupción ciudadana

Jorge Alonso*



La vida política tapatía tradicional detonó con las explosiones del 22 de abril de 1992. Previamente ya había mostrado resquebrajaduras. Con el estallido de los drenajes acabó de despertar una conciencia ciudadana que antes se había confinado en el subsuelo de la política.

La no tan santa alianza jalisciense

Desde hacía más de 40 años la política imperante era la que se había establecido a través de un acuerdo interelitista regional entre la clase política,¹ la jerarquía eclesiástica y la cúspide de la iniciativa privada.² El ritmo y dirección de lo que acontecía en la política jalisciense recibía su impulso del resultado del ajuste entre esas tres entidades. Ese pacto político³ resultaba tan totalizador que tañía al social y de alguna manera suplantaba la acción del resto de la sociedad civil.⁴ No que ésta no viviera; pero su latencia predominaba. La tónica que se imponía y que se propalaba era que había tal concordia social que no pasaba otra cosa. Ciertamente había conflictos, pero éstos eran diluidos a través del accionar elitista tripartito.

Una aparente estabilidad transida de contradicciones

La gran ciudad de la pequeña industria⁵ vivía y producía a través de una gran cantidad de pequeños talleres y comercios, pero prevalecía la visión de unos cuantos que controlaban y se rotaban la dirección de cámaras y organismos empresariales. Muchos trabajadores no estaban sindicalizados, y los que sí estaban bajo el control corporativo no tenían expresiones propias. Por eso mismo se podían leer desplegados firmados conjuntamente por anquilosados líderes que encabezaban las burocracias obreras junto a los empresarios de peso en la región.⁶ La universidad pública; la universidad privada más añeja, bajo la tutela del grupo denominado *tecos*, y la universidad de los jesuitas establecían un triángulo en que este último de los lados se adecuaba a la tónica imperante, mientras los otros dos, como en espejo,⁷ disputaban no sólo el control estudiantil sino proyectar ideología y dirección a la sociedad. Pese a conflictos y contradicciones, las pugnas quedaban bajo el manto cupular. La guerrilla urbana tapatía conjuntó la problemática juvenil nacional con la disputa del espacio de la universidad pública entre dos fracciones. En esta coyuntura las relaciones entre la iniciativa privada y el gobier-

no federal se tensaron a raíz del asesinato de un industrial representativo. Pero en menos de un mes las heridas que el pacto tradicional sufrió pudieron ser restañadas.

Los problemas electorales, las luchas campesinas, los reclamos urbanos que empezaron a proliferar en los años setenta y ochenta⁸ mostraban una sociedad que no se resignaba a circunscribirse en el pacto de cúpulas. Pero finalmente éstas lograban readecuar su dominio e imponer el estilo político a la entidad.

Ruptura y reacomodo electoral

Los partidos políticos mostraban un bipartidismo creciente e intercambiable en la capital del estado entre el PRI y el PAN con algunos enclaves fuertes de izquierda. También estaba presente un sinarquismo con auge en la zona alteña, un predominio priísta en el agro, no sin conflictos y competencias con los demás partidos en algunas ubicaciones muy delimitadas.⁹ Sin embargo, la presencia de las candidaturas presidenciales de Cárdenas y Clouthier trastocaron el tradicional panorama electoral de Jalisco. Más de 30% de los electores votó por el PAN, y el neocardenismo alcanzó más de 23% de los electores. Guadalajara se tiñó de azul con la victoria panista en ocho de las diez diputaciones metropolitanas. No obstante, unos meses después, con la candidatura priísta de Guillermo Cosío Vidaurri, se propició una readecuación. Cosío llegó apoyado en sus vínculos con gran número de los grupos políticos de la entidad. Enfatizó que era auténticamente jalisciense. Logró el apoyo de la alta burguesía. El DHIAC, que meses atrás apoyó con entusiasmo a Clouthier, ahora se inclinó por Cosío. En medio de una gran abstención que Cosío interpretó como un aval de antiguos votantes opositores, en 1989 asumió el gobierno de Jalisco.¹⁰

Una ilusa grandesa estatal que culmina en enorme desastre

Los aduladores apenas pudieron decir que en el primer año de la gestión de Cosío se habían preparado condiciones para un despegue. El primer informe se ufano de

* Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) Occidente.

avances en seguridad pública que eran más retórica que realidad.¹¹ Pese a primeras dificultades presupuestales, el gobernador logró el apoyo presidencial y emprendió mucha obra pública vista más como negocio propio, de su familia y de allegados. En esta tarea, abandonada la costumbre de poner a concurso las obras, Cosío decidía por sí y su familia quiénes se beneficiarían de construcciones y de servicios. En este desigual reparto dejó fuera a no pocos empresarios que habían puesto en él su esperanza. La élite cosíista se fue cerrando y cierto descontento se gestó muy al principio del sexenio de este gobernante. El patrimonialismo campeaba. No había negocio importante en la entidad en donde no estuviera la mano de la familia Cosío. A finales de 1990 el gobernador reconocía públicamente que Jalisco no había avanzado como todos lo deseaban.¹² A principios de enero de 1991 quedó instalado el Consejo Consultivo Estatal de Protección Ciudadana, cuyas atribuciones eran las de realizar estudios de la situación estatal en el área de protección ciudadana, así como proponer objetivos y políticas para la adecuada solución de problemas. Uno de sus cometidos también fue el de difundir los derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia de protección ciudadana así como atribuciones de los cuerpos de seguridad. Por los acontecimientos de 1992 se puede constatar que se trató de una estructura que cumplió una función burocrática más sin mayor trascendencia.

En el segundo informe de gobierno, Cosío destacó como uno de los puntos primordiales de su gestión el ejecutar un programa caminero que comunicara "con eficiencia" a la entidad. Este fue uno de sus más palpables fracasos. Otra meta proclamada fue la de consolidar la actividad turística, donde los intereses del grupo de Cosío focalizaron las obras relativas a la denominada *Costalegre*. Volvió a insistir en que la seguridad pública era "decisiva en la cohesión social y en el reconocimiento cívico hacia la autoridad".¹³ En torno a esto prometía crear una cultura de mayor confianza. No obstante, tuvo que admitir que el estado sufría una preocupante ola delictiva, y que no había excusa para los servidores públicos, que estaban obligados antes que nadie a respetar la ley. Mientras la familia Cosío y sus allegados seguían considerando al gobierno como un botín que incrementaba sus haberes, el deterioro en cuanto a seguridad pública y protección ciudadana aumentaba también.

En enero de 1991, por novena vez, el Presidente de la República visitaba la entidad para inaugurar obras. Al mes siguiente el gobernador aplaudía el inicio del programa de verificación vehicular. Si las fisuras en el pacto cupular trascendían poco a la mayoría de la población, la verificación de automotores evidenció a los ojos de las masas la corrupción del grupo en el poder. El programa quedó en manos de uno de los empresarios cercanos al grupo Cosío. Más allá de las molestias que fue ocasionando para no pocos automovilistas, fue palpable para todos que las calcamonías que acreditaban el haber pasado la verificación estaban en un mercado ilegal, pues los autobuses supuestamente verificados seguían contaminando en grande.

Las elecciones federales intermedias, celebradas en agosto de 1991, significaron un momento estelar para el mandatario jalisciense. Las indicaciones centrales en torno a estas elecciones estaban dadas en el sentido de asegurar una Cámara de Diputados en la que el Presidente no tuviera que negociar con ninguna fuerza política para sacar adelante todo un conjunto de leyes que apuntalaran sus programas privatizadores y dieran marco para el Tratado de Libre Comercio. Los priistas jaliscienses se esmeraron en conseguir una gran cantidad de votos, muchos coaccionados y no pocos espurios. Esto les permitió no sólo recuperar las diputaciones perdidas sino también ofrecer un porcentaje importante para los planes presidenciales. El gobernador recibió el mismo mes de agosto felicitaciones del Presidente por los trabajos en torno a la Cumbre Iberoamericana llevada a cabo en Guadalajara un mes antes. En este auge político, contra las sugerencias de reconocidos ingenieros, que proponían otras alternativas en cuanto a ubicación, Cosío se empeñó en sacar adelante una jugosa obra para empresarios constructores vinculados a su grupo con la puesta en la marcha de la construcción de la línea dos del tren ligero. Se haría donde resultaba más costosa y en donde se tendría que afectar al colector con un sifón que permitiría el flujo de líquidos, pero que obstaculizaría el de gases.¹⁴

Considerando fincado su poder, el gobernador emprendió una reforma electoral que se ponía atrás del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y para la cual deseó las propuestas de los partidos de oposición. Para las elecciones locales intermedias su grupo se dedicó a imponer a quienes consiguieron su favor sin escuchar a los ciudadanos de los diversos municipios. Los conflictos preelectorales en repudio a imposiciones fueron numerosos. Hubo muchos desprendimientos del PRI. En no pocas localidades los ciudadanos optaron por partidos de la oposición para mostrar su desacuerdo con las designaciones de los candidatos oficiales. El partido del estado tuvo que reconocer su derrota en 18 municipios. No obstante, el clima postelectoral fue caldeado. El reclamo partidario, pero sobre todo ciudadano, en contra del fraude se presentó con fuerza en los Altos y en la zona Sur y costera del estado. Hubo dos marchas. Una de panistas alteños hacia el Distrito Federal, y otra de perredistas de Cihuatlán que recorrieron el Sur del estado haciendo reuniones en las que las protestas ciudadanas se fueron afianzando en contra de la imposición priista en un gran número de municipios. El gobierno de Cosío tuvo que afrontar la presión de los partidos de oposición que no aceptaban los resultados oficiales en importantes municipios.

En los primeros meses de 1992, al desprestigio que experimentaba el gobierno por las manipulaciones electorales, se sumaron tres expresiones ciudadanas que pusieron en entredicho al gobernador. La primera tuvo que ver con la difusión que hizo la revista *Proceso* de los principales negocios de la familia Cosío y allegados en la costa de Jalisco. Los cihuatlanenses inconformes con los resultados electorales en su municipio alegaban que el fraude tenía como trasfondo salvaguardar intereses

del grupo de Cosío en la costa. El artículo sirvió de catalizador. Se reprodujo y se distribuyó profusamente. Quienes desde hacía tiempo se encontraban agraviados por el nepotismo cosíista, aprovecharon la publicación como un resonador de sus quejas. El clima adverso al gobierno se iba elevando. La segunda manifestación de repudio al gobierno tuvo como origen el cansancio ante la ola delictiva, mucha de ella ocasionada por quienes debían proteger el orden. La inseguridad ciudadana inquietaba, pero se hizo intolerable para capas de ingresos altos cuando una joven educada en un colegio dedicado a clases altas fue asesinada por un policía. La crítica hacia el gobierno, que hasta entonces se había quedado en los espacios privados, salió a las calles. Una gran marcha de madres de luto que en silencio se encaminó al Palacio de Gobierno fue organizada casi espontáneamente y conmovió a la ciudad. Al contactarse una gran cantidad de agraviados por la política de Cosío, y al constatarse masivos, adquirieron conciencia de su fuerza ciudadana para exigir a los gobernantes la salvaguarda de derechos conculcados.

El manejo del gobierno como si fuera un negocio familiar y grupal, por una parte, y la falta de seguridad pública, por la otra, malquistaron con Cosío a importantes sectores de las clases altas.

Campesinos de la costa, rancheros alteños, pobladores de distintos municipios de la entidad mantenían su repudio a nuevos alcaldes ligados con el gobernador y a los cuales se les achacaba haber accedido al puesto por medio de métodos ilegales. Finalmente, miles de maestros mal pagados y cansados de caciquismos magisteriales en manos de la familia del gobernador también irrumpieron en las calles. El descontento ciudadano por múltiples motivos se estaba manifestando persistentemente también de variadas formas.

El gobernador, que de sentirse en la cúspide del poder vio tanta agitación cívica, en lugar de indagar sobre sus verdaderas causas, relacionadas con la manera de gobernar que había instituido desde su llegada al puesto, interpretó todo como una maquinación en su contra. En vez de examinar los problemas planteados y ofrecer soluciones adecuadas, amenazó. Esto exacerbó más los ánimos en su contra.

En este contexto llegó Cosío a su tercer informe de gobierno. Trató de justificarse. Para calmar la efervescencia postelectoral prometió una nueva ley. Ofreció que la verificación vehicular se abriría a otras empresas.¹⁵ Pero frente al local en donde rindió su informe seguían manifestaciones de rechazo a la política cosíista. El gobernador optó por apoyarse en grupos corporativizados. La monopolización facciosa de política y economía fraguada por el cosíismo le impedían romper su propio círculo para abrirse a verdaderas soluciones. Sin embargo, el gobernador logró aprovechar la inercia de la costumbre del dominio en la entidad. Pese a las presiones que grupos de empresarios hacían en la capital de la República en orden a su remoción, Cosío consiguió que una de las obras más impugnadas por la iniciativa privada y por el PAN, la de la presa El Purgatorio, fuera aceptada por la cúpula empresarial. El PAN decidió bajar el tono y ya no echar mano de movilizacio-

nes. Sólo quedaba la protesta de los perredistas que exigían un concejo municipal en Cihuatlán.

La recomposición política se iba fraguando entre las élites, pero ya se había despertado una crítica ciudadana que, no obstante ser muy incipiente y tentaleante, podría cobrar forma. Grupos ecologistas, de abogados, de mujeres, de estudiantes, de profesionistas, se reunieron en un foro cívico para analizar y dar su punto de vista sobre el informe del gobernador. Estos grupos, que tenían vida propia, empezaban a contactarse también y a vislumbrar acciones convergentes. En este contexto, el 22 de abril, en el Sector Reforma de Guadalajara, explotaron drenajes que ocasionaron muertes, heridos y destrucción. No sólo se hundieron calles y se derrumbaron casas, comercios y talleres, también se afectó algo más intangible y de difícil reparación: toda una construcción cultural en una vieja zona de la ciudad. Muchos daños cuantificables, como serían los más onerosos referidos al número de muertes, quedaron sin dilucidarse. Más allá de la destrucción material de las casas habitación, se atentó contra los hogares de un gran número de familias.¹⁶ Lo más íntimo quedó expuesto en medio de los escombros. Lo privado se convirtió en público con fuerza inusitada y propició cambios políticos estructurales, pues trastocó las tradicionales relaciones de poder.



La radicalización ciudadana

La constatación de que no se estaba ante un desastre natural sino ante un accidente de grandes proporciones que pudo haberse evitado y cuyos responsables se encontraban en el mismo gobierno cambió el tono del reclamo ciudadano. Las ineptitudes gubernamentales para prevenir la tragedia primero, pero sobre todo para enfrentar sus consecuencias inmediatamente después, terminaron por derrumbar lo poco que quedaba de un gobierno corrupto e ineficaz. Los comentarios de la prensa internacional iban en el sentido de que era una lástima ver que había gobernantes como Cosío que obstaculizaban la labor modernizadora de Salinas.¹⁷ El enojo de los afectados creció cuando el gobierno estatal envió maquinaria pesada a tratar de cubrir los destrozos cuando las labores de rescate apenas comenzaban. El derrumbe del gobierno arrastró también al PRI. La zona afectada tradicionalmente había sido coto de la CROC. No obstante que esta central logró mantener el control de algunos espacios, en muchos damnificados nació un profundo rechazo hacia el gobierno y su partido.

El informe de la Procuraduría General de la República no convenció a nadie. La ciudadanía presenciaba una maniobra de encubrimiento de culpables en las altas esferas gubernamentales. A consecuencia de ese informe, el recién estrenado presidente municipal de Guadalajara, Enrique Dau, compadre de Cosío, con quien tenía muchos negocios, fue a dar a la cárcel. Pero el clamor general era que Cosío renunciara y fuera enjuiciado.

Aunque el gobierno intentó concentrar toda la ayuda proveniente de la sociedad e impedir que se expresara de manera independiente, la auténtica solidaridad ciudadana, con profunda desconfianza en el gobierno, se organizó para ofrecer a los afectados directamente su apoyo. La presión porque Cosío dejara el gobierno se expresó con fuerza, desprecio y gran enojo. Pese a que se aferraba al puesto como a una presa, ocho días después de las explosiones Cosío tuvo que abandonar el Palacio de Gobierno. Las desacertadas declaraciones que hizo en torno al siniestro contribuyeron a hundirlo y desprestigiarlo más.

Control vs. autonomía

Centralmente fue reestructurado el gobierno de la entidad. Se puso a un político proveniente del equipo de Cosío. Se optó porque el gobernador pidiera licencia, pues una renuncia abría la puerta a nuevas elecciones, las cuales el partido oficial estaba seguro que las perdería. El gobernador interino asumió el cargo en medio de protestas populares; en ellas se denunciaba que el que se iba y el que llegaba implicaban políticamente la misma cosa. Y efectivamente así era. El recién llegado aseguró que proseguirían las obras que se habían comprometido en tiempos de Cosío, pues estaban ligadas políticamente con las campañas del partido del Estado. Las complicidades no se destrababan.

No obstante que en el gobierno estatal hubo un reacomodo entre los tradicionales grupos políticos del

estado, que la inclusión en el equipo de Rivera de un panista fue a título personal y no producto de una negociación partidaria y que el gobierno municipal de Guadalajara fue recompuesto obedeciendo a las cuotas de los agrupamientos corporativizantes en decadencia, en diversas capas de la sociedad se notó un cambio. Había conciencia de un despertar ciudadano al que no estaba acostumbrada la vida política en la entidad.

El gobierno interino, ante la emergencia cívica, al principio ensayó formas diferentes a las que había acostumbrado Cosío. Pero pronto mostró su verdadero rostro. Como surgió un grupo de afectados que no se quiso supeditar a la burocracia del Programa Nacional de Solidaridad (marco en el que se les quiso introducir para que el daño fuera reparado), y mantuvo a toda costa su independencia y sus reclamos, el gobierno interino no encontró otro método para tratar de someterlos que la represión. Los hizo doblemente damnificados. El gobierno era el responsable de que los reclamantes se hubieran quedado en la calle, y cuando externaban públicamente sus demandas, la policía los vapuleó. Los afectados sufrieron muchos agravios además de los infligidos por las explosiones. Sus demandas de reconstrucción fueron reducidas a indemnizaciones que se circunscribieron a tortuosos trámites burocráticos. Su representatividad también fue escatimada a través de imposiciones. Pudieron remontar todo eso, y en beneficio colectivo echar fuera del contrato entre el Patronato y los afectados la cláusula que encubría una expropiación en su contra. También lograron que sus propuestas fueran escuchadas. Establaron una penosa lucha por defender tanto sus espacios afectados (y contra los que se cernían planes en los cuales los damnificados resultaban de nuevo agraviados y marginados) como sus tiempos. La multiplicación de agravios no los arredró, sino que fortaleció una organización situada en lo que Alberoni llamaría un estado naciente.

Si el gobierno de Cosío cayó porque había perdido todo respeto por parte de la ciudadanía y porque se dio un vacío de poder, el nuevo no logró remontar del todo la ingobernabilidad. Quedó cuestionado tanto por el hecho de represión contra un grupo de afectados como por las torpes e increíbles explicaciones que trató de dar ante el hecho. Hubo de nuevo encubrimientos. Pero la ciudadanía de nueva cuenta no creyó las versiones gubernamentales; se indignó por la afrenta que implicaban contra la inteligencia de la opinión pública, y hasta se burló de su inconsistencia y necedad. Entonces intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos y echó por tierra las explicaciones de Rivera. Después de la represión, el gobierno interino ostentó una carencia de credibilidad y confiabilidad.

Los partidos políticos también se desdibujaron. El partido del Estado recibió con creces al repudio que se echó sobre el gobierno. Intentó recuperar terreno aprovechando la organización oficial y los trabajos en torno a las indemnizaciones; pero como éstas quedaban cortas, le resultaba difícil vestirse en tales acciones. El rechazo de muchos afectados hacia los partidos principalmente era dirigido hacia el PRI. El gobierno quiso desmentar también a los demás partidos, y éstos se

inhibieron: emitieron declaraciones en torno a las situaciones de los damnificados, pero no organizaron acciones. La dirigencia panista temió la radicalidad ciudadana del grupo independiente, y prefirió resguardarse para aprovechar las siguientes elecciones y usufructuar el descontento. No obstante emprendió una acción que también provocó confusión. Tenía entre manos algunas sanciones hacia militantes panistas por problemas internos. En el momento en que el gobierno fascistamente intentaba negar a los grupos las posibilidades de actuación política en torno a los problemas de la reconstrucción, lo que pretendía extender hacia los mismos partidos, el PAN expulsó a un dirigente regional que había estado en contacto con los damnificados. Por más que quiso explicar que se debía a razones estatutarias, el gobierno y la sociedad lo tomaron como una condena de la acción de militantes blanquiazules entre los damnificados. El PRD, frenado por sus pugnas internas, se centró en el caso de Cihuatlán. Rivera, en lugar de solucionar pronto este explosivo problema originado en elecciones fraudulentas, lo extremó debido a comportamientos propios no de un gobernante sino de un jefe faccioso.

Otra vez el gobierno interino intentó readecuar el pacto elitista que había servido para gobernar Jalisco durante cuatro décadas. Las cúpulas empresariales propagaron un reiterado manifiesto en los medios de difusión masiva por el que machacaban que los sucesos del 22 de abril habría que mandarlos a un rincón de la memoria, que Jalisco estaba de pie. Después de la represión, y cuando sobrevinieron las peticiones de la CNDH, los empresarios solicitaron al gobernador que a todo ese asunto de la represión se le diera "carpetazo". Aducían que se estaba creando una mala imagen que repercutía en detrimento de los negocios. Elena Poniatowska, ante esa actitud, lanzó un comentario lapidario: "¡cuánto egoísmo!".¹⁸ Las cúpulas empresariales añoraban los tiempos del dominio ido. Rehacían las alianzas, pero la ciudadanía seguía su curso y ya no se dejaba dirigir por ellos. Jalisco no estaba de pie como recalaban las cúpulas. La ciudadanía ciertamente se estaba incorporando, pero sabía que no estaría de pie ni deambularía por su cuenta si permitía que se atentara contra su propia dignidad y proseguía dócilmente bajo la conducción elitista.

Un movimiento ciudadano en ciernes

Pero lo que empezaba a moverse antes de las explosiones, con éstas acabó por dinamizarse más. Muchos grupos civiles no se quedaron sólo en la repulsa al régimen de Cosío y su secuela con Rivera. Adquirieron conciencia de su potencialidad para defender derechos humanos, derechos civiles. Una consigna utilizada por el movimiento independiente de damnificados, "que la sumisión quede sepultada bajo los escombros", también sirvió para otros sectores sociales. El anterior sometimiento, y los mecanismos sociales que servían para lograrlo, se resquebrajó. Se comenzó a dar una defensa de la autonomía.

La cultura política del patrimonialismo subsiste en las cúpulas gobernantes, pero la sociedad se muestra reacia a seguirla tolerando. Las recomposiciones del poder ya no son posibles en los viejos moldes. La ciudadanía ya no está amodorrada, sino atenta y dispuesta a acciones originales. Las filiocrasias y las lealtades a compadrazgos que se remuneran con puestos políticos han proseguido. Esto hasta a muchos ciudadanos. El poder está acostumbrado al trato cupular. Pero surgen nuevos actores, con otros lenguajes e identidades, combinando viejas acciones con modos originales, que requieren otros tratos.¹⁹ Hay exigencia del respeto a la dignidad ciudadana. Hay una sociedad crítica y activa. El gobierno y los partidos empiezan a quedar rebasados en sus formas de mediación. Se comienzan a establecer nuevos patrones en las relaciones entre la ciudadanía y los gobernantes. Surge un rechazo a la usurpación de la solidaridad y de su empleo burocrático y supeditante. Una auténtica solidaridad cívica se va imponiendo y rescatando su mismo nombre de las perversiones del poder. Se está haciendo presente una sociedad civil que se deslinda del viejo pacto político que venía operando en Jalisco y que a través de múltiples expresiones repudia la imposición y reclama la verdad. Más allá de competencias por membresías, en un ambiente de pluralidad y de respeto, está expandiéndose la inquietud por construir un duradero movimiento ciudadano que fincado en la experiencia del 22 de abril trascienda hacia una variada problemática.²⁰



Una posible salida

Sería iluso pensar que en esta confrontación (recalcada analíticamente) entre amplios sectores de la sociedad civil y el gobierno de la entidad, éste se encuentre perdiendo todos sus anteriores espacios. El equipo que prosiguió al de Cosío es en realidad una continuación del anterior con algunas concesiones a otros grupos que habían quedado relegados. Inmediatamente después de las explosiones, y sobre todo a raíz del desalojo de un grupo de damnificados de la Plaza de Armas, mostró mucha torpeza. Habiendo entrado con el beneficio de la duda por parte de algunas fuerzas políticas, en especial por una importante fracción panista, condujo a la certeza de actuaciones ineptas. Prolongó la situación de un poder fuertemente cuestionado y poco fiable. Sin embargo, con apoyos del gobierno federal y si no se cometieran nuevas equivocaciones, podría ir afianzándose. Es claro que, no obstante que muchos empresarios y grupos políticos tradicionales quisieran volver a la anterior rutina en la relación de dominio, ésta ya no podrá ser como antes.

Por su parte, el despertar ciudadano es un hecho, y marca la situación posterior a las explosiones. Pero ese impulso, como todo lo que inicia, puede no avanzar y aún volver a estados latentes. Esto no quita que la experiencia de movilización y de exigencia de los derechos ciudadanos haya producido un efecto tal que en adelante no se podrá gobernar como si esto no hubiera ocurrido. Si no llegara a ser contundente, sin embargo, habrá un mayor cuidado de parte de la ciudadanía con respecto a los manejos económicos que hacen los gobernantes. Se les cuidarán más las manos. También no se tolerarán fácil e impunemente los atentados en contra de los derechos humanos. Ciertamente la ciudadanía no es un todo homogéneo, pero hay un sentimiento aglutinante, unificador en demandas claras, sencillas, y que llegan a ser radicales frente a un poder acostumbrado a la impunidad y a propiciar complicidades.

Las inercias en el gobierno y entre los mismos ciudadanos son muy correosas. Pero una vez que una parte de éstos se ha dinamizado y cobrado conciencia de un papel de contrapeso al poder (más efectivo que los clásicos contrapesos poco operantes de un sistema democrático en donde impera la discrecionalidad y la no separación real de poderes) será poco factible que abandone esa tarea. Es más previsible que sume más sectores para adquirir más contundencia social en ese cometido. Expresada en diferentes formas y sabedora de que sus innovaciones provienen de la defensa de sus derechos, la radicalidad ciudadana está colocando a muchos sectores en posiciones lejanas a las sumisiones instituidas por la verticalidad, y en la búsqueda de confrontaciones que tienden a situar más horizontalmente el trato con las administraciones públicas y a producir una práctica en continuos ejercicios de vigilancia y de exigencia sobre quienes desempeñan cargos públicos. El servilismo se esfuma, los derechos ciudadanos se fortalecen, y los deberes de los gobernantes se acotan, se confrontan y se exigen. Se abren perspectivas convergentes en identidades ciudadanas que replantean las formas de comporta-

miento de los gobernantes frente a ciudadanos que ponen por delante la dignidad. ♦

Notas

1. El término clase política se usa en el sentido que da G. Mosca, en *Elementi di scienza politica*, Torino, 1923.
2. Para una profundización de esta interrelación se puede consultar el estudio de Carlos Alba y Fernando González, *Cúpulas empresariales y poderes regionales en Jalisco*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1990.
3. Históricamente los pactos han implicado la imposición de una paz entre los pactantes. Uno de los logros tantas veces repetido de la interacción de las tres élites de Jalisco era la paz, la tranquilidad en la entidad. En este contrato social y político lo que contaba era el acuerdo entre los grupos elitistas, que a su vez podían ufanarse de tener el control de las secciones sociales que les correspondían y que eran las que creían que contaban para la marcha económica, social y política de la entidad.
4. Aquí, pactos y sociedad civil se usan a la manera de P. Farneti, *Sistema político e società civile*, Torino, 1971.
5. Arias, Patricia (coord.). *La gran ciudad de la pequeña industria*, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1985.
6. Tamayo, Jaime. *La estructura sindical en Jalisco*, EDUG, Guadalajara, 1985.
7. González, Fernando. "Algunos efectos del 68 en la Universidad de Guadalajara", en *Paréntesis*, noviembre de 1989.
8. Cfr. Ramírez, Juan Manuel. *El comité popular del sur en el área metropolitana de Guadalajara*, en prensa. De la Peña, Guillermo. "La cultura política entre los sectores populares de Guadalajara", en *Nueva Antropología*, núm.38, 1990, pp. 83-107.
9. Preciado, Jaime. *Geografía electoral de Jalisco*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1990.
10. Un análisis de las elecciones federales y locales en Jalisco en 1988 se encuentra en: Alonso, Jorge y Silvia Gómez (coord.). *Insurgencia democrática: las elecciones locales*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1991.
11. Gobierno del Estado de Jalisco. *Por la grandeza del Estado*, Reseña, p.22.
12. *Ibidem*, p. 276.
13. Cosío Vidaurri, Guillermo. *Segundo informe de gobierno*, Gobierno del Estado de Jalisco, febrero de 1991, p.63.
14. Este fue un elemento que se apuntó en varias ocasiones en torno a las responsabilidades del estallido del colector el 22 de abril.
15. Cosío Vidaurri, Guillermo. *Tercer informe de gobierno*, Gobierno del Estado de Jalisco, 15 de marzo de 1992.
16. Para profundizar, se pueden consultar los trabajos de Fernando Bontempo y Marijose Amerlinck.
17. Se pueden consultar las crónicas y editoriales del diario español *El País*.
18. Sesión en el Ciesas Occidente, 17 de junio de 1992.
19. Para un análisis de los nuevos símbolos y la nueva cultura política que se ha fraguado en la ciudad, se puede consultar el estudio que realiza Rossana Reguillo.
20. Se está abriendo una cultura dialógica, pero no binaria sino múltiple, y no simplemente reticular, como situada sólo bidimensionalmente sino imbricada en diferentes sentidos y profundidades.